

**ANEXO 7:**

**INFORME DEL PRESIDENTE DE LA  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA  
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)  
(WINDSOR, CANADÁ, 06 DE JUNIO DE 2000)**

**INFORME DEL PRESIDENTE DE LA  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  
JUEZ ANTÓNIO A. CANÇADO TRINDADE,  
ANTE LA XXX ASAMBLEA GENERAL DE LA  
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS  
(Windsor, Canadá, 06 de junio de 2000)**

Señor Presidente,

Señoras y Señores Embajadores y Representantes,

Es esta la cuarta vez este semestre que tengo el honor de comparecer ante las instancias políticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para presentar el Informe de labores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus actividades en contribución al fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Mi primera presentación fue ante la Reunión del Grupo *Ad Hoc* de representantes de los Cancilleres, realizada en Costa Rica los días 10 y 11 de febrero pasado; la segunda, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, ocasión en que a mi presentación se siguió un fructuoso diálogo de cuatro horas sobre la contribución de la Corte al fortalecimiento y al rumbo del sistema interamericano de protección, el 16 de marzo pasado; y la tercera, ante la misma Comisión del Consejo Permanente de la OEA, ocasión en que presenté con detalles, el 13 de abril último, la labor de la Corte durante el año de 1999. Como el *Informe Anual* de la Corte, de 823 páginas, enviado a finales de febrero último a la Secretaría General de la Organización, ya es, pues, del pleno conocimiento de todas las Delegaciones de los Estados Miembros de la OEA, me permito, en la presente ocasión, tan sólo resumir los puntos principales del mismo con algunos breves comentarios adicionales.

El primer aspecto medular del referido *Informe* reside en el sometimiento a consideración de la Corte de siete nuevos casos contenciosos y de una nueva solicitud de medidas provisionales, durante el período en cuestión. A lo largo de 1999, el Tribunal realizó cuatro períodos ordinarios de sesiones, en que se dictaron tres sentencias sobre excepciones preliminares, dos sentencias de fondo, dos sentencias de reparaciones, tres sentencias de interpretación de sentencia de reparaciones, dos resoluciones sobre cumplimiento de sentencia y once resoluciones sobre medidas provisionales. Como demostración de la tarea ascendente en la resolución de casos contenciosos, hay actualmente 27 casos en trámite en distintas etapas procesales ante la Corte, además de las 11 medidas provisionales de protección.

El 25 de marzo de 1999 la República Dominicana depositó ante la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte. Hace poco, anteaer precisamente, Barbados hizo lo mismo. Dichas decisiones de la República Dominicana y de Barbados (sumadas a las de México, Haití y Brasil el año anterior), contribuyen a fortalecer y consolidar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el continente americano.

Me permito reiterar, al respecto, el llamado que, en las ya mencionadas ocasiones anteriores, formulé a los Estados que todavía no lo han hecho a que ratifiquen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconozcan la competencia obligatoria de la Corte en materia contenciosa, a fin de que el sistema interamericano de protección se enriquezca con la universalidad de composición en el ámbito regional de su operación. En el presente dominio de protección, las mismas normas y obligaciones deben valer para todos los Estados, jurídicamente iguales.

El 20 de noviembre de 1999 se realizó, en la sede de la Corte, una nueva reunión conjunta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se tomaron acuerdos para mejor coordinar la labor de ambos órganos, y se enfatizó la necesidad de cumplimiento de las decisiones de ambos órganos.

Los días 23 y 24 de noviembre de 1999 la Corte celebró un gran Seminario en San José de Costa Rica para conmemorar los 20 años de su instalación y los 30 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el Seminario, denominado "*El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI*", se plantearon, entre otros, temas relativos a las funciones contenciosa y consultiva de la Corte; las funciones de la Comisión Interamericana; el compromiso de la comunidad internacional con la protección internacional efectiva de los derechos humanos y las implicaciones financieras del fortalecimiento del sistema interamericano; el acceso de los individuos a la justicia en el plano internacional y el fortalecimiento del papel de las ONGs en el sistema interamericano.

La Corte, además, realizó cuatro Reuniones de Expertos, dos de ellas en 1999 y dos en el año 2000. Las dos primeras se llevaron a cabo en la sede de la Corte los días 20 de septiembre y 24 de noviembre, ambas de 1999, y las dos siguientes tuvieron lugar, también en la sede de la Corte, en el mes de febrero de 2000. En estas cuatro reuniones participaron los Jueces de la Corte, miembros de la Comisión, y altas personalidades en el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de distintos continentes, provenientes tanto de círculos académicos como de entidades de la sociedad civil. Durante estas reuniones se profundizaron temas tales como la participación de los individuos en el procedimiento ante la Corte; la especificidad del rol de la Comisión Interamericana; la valoración de la prueba; el procedimiento en la fase de excepciones preliminares; el cumplimiento y supervisión de las sentencias de la Corte y de las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión; y los recursos económicos adicionales para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Estos eventos académicos demostraron el poder de convocatoria de la Corte, con miras a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos.

Recientemente la Corte recibió la visita de tres Presidentes de la República: en noviembre de 1999, del Excelentísimo señor Presidente de la República de Paraguay, Doctor Luis González Macchi; en abril de 2000, del Excelentísimo señor Presidente de la República Federativa del Brasil, Doctor Fernando Henrique Cardoso; y la semana pasada, del Excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia, Doctor Andrés Pastrana Arango. Los tres Presidentes de la República se hicieron acompañar de sus respectivos Cancilleres y comitivas de alto nivel.

El 22 de noviembre de 1999 la Corte recibió en su sede, con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario, a los Cancilleres o sus representantes, de numerosos países de las Américas y el Caribe, acompañados del Excelentísimo señor César Gaviria, Secretario General de la OEA y delegaciones oficiales de los Estados Miembros de esta Organización.

En el área de cooperación internacional, durante el año de 1999, la Corte continuó con la instrumentación del acuerdo de cooperación con la Unión Europea para la divulgación de las publicaciones del Tribunal y el desarrollo de nuevos recursos y fuentes de información para los usuarios del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Corte, además, firmó nuevos convenios de cooperación con el Centro Danés para los Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Escuela Nacional de la Magistratura de Brasil. Asimismo se continuó la implementación de los convenios suscritos en años anteriores con la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Carlos III de Madrid.

En cuanto al cumplimiento de las sentencias de la Corte, tal como ya informé a esta Organización en mis presentaciones anteriores y tal como consta en el *Informe Anual* de la Corte, me corresponde, de conformidad con el artículo 65 de la Convención, informar, en nombre de la Corte, a esta Comisión General, del incumplimiento por el Estado de Perú de las sentencias emitidas por la Corte en los casos *Castillo Páez*, *Castillo Petruzzi* y *Otros* y *Loayza Tamayo*, por lo que debo solicitar a esta Asamblea General que examine la materia con miras al cumplimiento de dichas sentencias por el Estado demandado.

Es importante, sobre este tema, resaltar que, además de constituir el cumplimiento de sentencias una obligación convencional (artículo 68 de la Convención Americana) de los Estados Partes, en la primera reunión celebrada por el Grupo Ad Hoc sobre los Derechos Humanos (supra), los días 10 y 11 de febrero pasado en Costa Rica, se formuló, entre otras, la siguiente recomendación sobre el papel de los Estados Partes en la Convención Americana como garantes del funcionamiento del sistema de protección y, en especial, del cumplimiento de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:

4. Recomendar a los Cancilleres que dentro de las actuales competencias de la Asamblea General y del Consejo Permanente se dé el tratamiento adecuado a los informes de la Comisión y de la Corte como forma de hacer efectivo el deber de los Estados de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los instrumentos del Sistema.

Este, como los demás párrafos del documento final de la referida Reunión, fueron adoptados por consenso; el párrafo anteriormente citado refleja la noción de *garantía colectiva*, subyacente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a todos los tratados de protección de los derechos humanos.

En cuanto a los estados financieros de la Corte, la auditoría realizada para el período fiscal de 1999 concluyó que los mismos expresan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la Institución, así como que los ingresos, desembolsos y flujos de efectivo para el período de 1999 se encuentran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados propios de entidades no lucrativas (como es el caso de la Corte) y aplicados sobre bases consistentes.

Finalmente, en cuanto al presupuesto de la Corte, hemos sometido a la consideración de la Asamblea General un proyecto de presupuesto para el año 2001, que contempla un incremento de un 37% sobre el del año 2000. Esto en razón de que el mismo ha estado congelado durante los últimos tres años, y lo único que la Corte pretende, al recuperar la pérdida del poder adquisitivo por causa del factor inflacionario, es volver al nivel del año 1998. Sin embargo, para sorpresa del Tribunal, antes que la Asamblea General se pronunciase, el incremento no fue concedido y hubo un recorte de \$150.500.00; no obstante, anteaer, al inicio de esta Asamblea General, el Subsecretario de Administración de la OEA me informó personalmente que serán prontamente reintegrados a la Corte aproximadamente dos tercios de los fondos recortados. De ocurrir esto así, el Tribunal normalizaría sus actividades por lo que resta del presente año.

Señor Presidente, señores Representantes, sobre el tema presupuestario de la Corte, me permito recordar la primera de las conclusiones de la Reunión del Grupo *Ad Hoc* sobre Derechos Humanos, creada por los Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en San José de Costa Rica los días 10 y 11 de febrero pasado, la cual recomienda *dar prioridad* en el presupuesto ordinario de la OEA a la asignación de recursos adicionales a los órganos interamericanos de derechos humanos. El documento que contiene esta y otras conclusiones, como ya me permití recordar, fue adoptado por consenso.

Quisiera concluir esta presentación con un mensaje positivo, de parte mía y de mis colegas de la Corte, a las señoras y señores Embajadores y Representantes: Me permito expresarles la confianza que tiene la Corte en los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como garantes de la misma. Han sido hechos indudablemente positivos el reciente aumento en el número de Estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, así como el respaldo, al más alto nivel, que han dado a la Corte los Presidentes de la República y los Cancilleres o sus Representantes que la han visitado recientemente. Quisiera agradecer el apoyo irrestricto que desde su instalación hasta la fecha le ha brindado a la Corte Costa Rica, inclusive financieramente, así como las recientes donaciones voluntarias por parte de México y Brasil.

También es un hecho notable el aporte positivo al sistema de protección que han dado, en los últimos años, varios Estados en casos llevados ante la Corte, tanto los que se han allana-

do total o parcialmente a las respectivas demandas, aceptando los hechos y su responsabilidad, como los que han demostrado un espíritu de cooperación y lealtad procesales en dichos casos, así como los que han dado fiel cumplimiento a las sentencias de la Corte, tal como relaté con detalles en mi Informe del 13 de abril último a la OEA.

Igualmente positivas han sido las iniciativas, en los últimos meses, del Diálogo sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos realizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA bajo la presidencia del Embajador Claude Heller de México, que ha producido un importante y constructivo Informe final; así como la labor del Grupo *Ad Hoc* sobre Derechos Humanos de Representantes de los Cancilleres, coordinado por el Canciller Roberto Rojas de Costa Rica, que adoptó una serie de importantes conclusiones, acogiendo una constructiva propuesta del Embajador Carlos Portales de Chile. Y, en fin, debo destacar la sustancial resolución adoptada recientemente por el Consejo Permanente de la OEA sobre el *Informe Anual* de la Corte, así como las intervenciones de 16 Delegaciones en nuestro debate de 13 de abril último en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, que no solamente apoyaron las labores del Tribunal sino que también se manifestaron, en forma unánime, en favor de un adecuado financiamiento para el trabajo futuro de la Corte.

La Corte está conciente de los retos actuales y futuros que hay que enfrentar. Veo con mucha claridad las providencias que deben ser tomadas para el fortalecimiento de nuestro sistema regional de protección, a operar en el ámbito de la universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos. En primer lugar, se impone, como ya señalé, la ratificación de la Convención Americana y de sus dos Protocolos en vigor, o la adhesión a los mismos, por todos los Estados de la región. La segunda providencia reside en la adopción de las medidas nacionales indispensables de implementación de la Convención Americana, de modo a asegurar la aplicabilidad directa de las normas de la Convención en el derecho interno de los Estados Partes y el fiel cumplimiento de las decisiones de la Corte.

El tercer punto consiste en la aceptación integral de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por todos los Estados Partes en la Convención, acompañada de la previsión del *automatismo* de la jurisdicción obligatoria de la Corte para todos los Estados Partes, sin restricciones. Las cláusulas relativas a la jurisdicción obligatoria de la Corte y al derecho de petición individual, necesariamente conjugadas, constituyen verdaderas *cláusulas pétreas* de la protección internacional de los derechos humanos: son ellas las que hacen viable el acceso de los individuos a la justicia en el plano internacional, lo que representa una verdadera revolución jurídica, tal vez el más importante legado que estamos llevando al siglo XXI.

Esto me conduce al cuarto punto, que es el imperativo del acceso directo de los individuos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, el cual requiere, en un primer momento, que se asegure la más amplia participación de los individuos (*locus standi*) en todas las etapas del procedimiento ante la Corte, con la preservación de las funciones no contenciosas de la Comisión Interamericana. Tal participación puede ser asegurada mediante modificaciones que comenzamos a introducir en septiembre de 1996 en el Reglamento de la Corte, seguidas de la

cristalización del derecho de acceso directo (*jus standi*) de los individuos a la jurisdicción de la Corte Interamericana (o sea, a la justicia en el plano internacional) mediante la adopción de un Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos con este propósito. Los necesarios avances en este sentido, acompañados por los recursos humanos y materiales indispensables y adecuados, convienen a todos, puesto que la vía jurisdiccional representa la forma más evolucionada y perfeccionada de la protección de los derechos humanos.

Por último, me parece necesario tener siempre presente el amplio alcance de las obligaciones convencionales de protección bajo los tratados de derechos humanos, las cuales vinculan a todos los Poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) del Estado. Al crear obligaciones para los Estados Partes *vis-à-vis* todos los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones, dichos tratados requieren el ejercicio de la *garantía colectiva* para la plena realización de su objeto y fin. La Corte Interamericana de Derechos Humanos confía en que, mediante el ejercicio permanente de dicha garantía colectiva, se contribuirá al fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en este umbral del nuevo siglo.

Dicho fortalecimiento habrá que erigirse, en resumen, en cuatro pilares básicos: la garantía del acceso directo de los individuos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la intangibilidad de tal jurisdicción (*cláusulas pétreas* de la protección internacional de los derechos humanos), sumadas al fiel cumplimiento por los Estados de todas las decisiones de la Corte y el ejercicio de la garantía colectiva por los Estados Partes de las obligaciones consagradas en la Convención Americana. Esta es una tarea de todos, de los órganos convencionales de supervisión de la Convención así como de los Estados Partes, para que logremos contribuir a la construcción de un mundo mejor para nuestros descendientes; las generaciones futuras nos darán su juicio sobre nuestra labor de protección.

Señor Presidente, señoras y señores Embajadores y Representantes, en mi nombre, en el del Vicepresidente de la Corte, Juez Máximo Pacheco Gómez, y en el del Secretario, Manuel E. Ventura Robles, quienes me acompañan en este acto, así como en el de todos los Jueces y personal de la Corte, les agradezco la atención prestada en esta ocasión para escuchar mi presentación de este *Informe* de la Corte Interamericana de Derechos Humanos correspondiente a sus labores durante el año 1999 y su contribución al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias por toda la atención.

Windsor, Canadá, 06 de junio de 2000.

**REPORT OF THE PRESIDENT OF THE  
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS,  
JUDGE ANTÔNIO CANÇADO TRINDADE, BEFORE THE  
XXX GENERAL ASSEMBLY OF THE ORGANIZATION OF  
AMERICAN STATES  
(Windsor, Canada, June 6, 2000)**

Mr. President,

Ambassadors and Representatives,

This is the fourth time I have the honor of appearing before the political echelon of the Organization of American States (OAS) to render the Report on the work of the Inter-American Court of Human Rights and its activities aimed at strengthening the inter-American system for the protection of human rights. My first presentation was before the *Ad Hoc* Group Meeting of representatives of Ministers of Foreign Affairs, which took place in Costa Rica last February 10 and 11; the second one was before the OAS Permanent Council's Commission on Juridical and Political Matters, when my presentation was followed by a fruitful four-hour dialogue on the Court's contribution to the strengthening and direction of the inter-American protection system, last March 16; and the third one, before the same OAS Permanent Council's Commission, when I presented in detail, last April 13, the Court's work during 1999. Since the Court's 823-page *Annual Report*, sent in late February to the Secretariat General of the Organization, is already known by all the Delegations of OAS Member States, this time I will only summarize its main points with some brief additional comments.

The first core feature of said *Report* is that seven new contentious cases and a new application for provisional measures were brought to the Court's consideration during the mentioned period. Throughout 1999, the Court held four regular sessions, in which it rendered three judgments on preliminary exceptions, two judgments on merits, two judgments on reparations, three judgments on reparation judgment interpretation, two decisions on enforcement of judgment, and eleven decisions on provisional measures. As an illustration of the growing task in solving contentious cases, there are currently 27 cases at different procedural stages being heard by the Court, in addition to 11 provisional protection measures.



On March 25, 1999, the Dominican Republic filed with OAS Secretariat General an instrument recognizing the Court's contentious jurisdiction. Recently, the day before yesterday to be exact, Barbados followed suit. Said decisions of the Dominican Republic and Barbados (coupled with those of Mexico, Haiti, and Brazil the previous year) contribute to strengthen and consolidate the inter-American system for the protection of human rights in the American continent.

On this matter, I would like to renew the call that, in the already mentioned occasions, I made to the States that have not yet ratified the American Convention on Human Rights to do so and to recognize the Court's mandatory competence in contentious matters, so the inter-American protection system becomes rich with a universal composition in its regional operating sphere. In the current protection domain, the same norms and obligations should be in force for all the juridically equal States.

On November 20, 1999, at the seat of the Court, we had a new joint meeting with the Inter-American Commission on Human Rights, where agreements were reached to better coordinate the task of both bodies and an emphasis was made on the need for enforcing the decisions of both bodies.

On November 23 and 24, 1999, the Court held a big Seminar in San José, Costa Rica, to commemorate its 20th anniversary and the 30th anniversary of the American Convention on Human Rights. The Seminar, called "*The Inter-American System for the Protection of Human Rights at the Threshold of the 21st Century*", among other things, covered issues concerning the Court's contentious and consultive functions, the Inter-American Commission's functions, the international community commitment to an effective international protection of human rights, and the financial implications of strengthening the inter-American system; individuals' access to justice at the international level, and the strengthening of NGO role in the inter-American system.

In addition, the Court held four Expert Meetings, two of them in 1999 and two in 2000. The first two took place at the seat of the Court on September 20 and November 24, both in 1999, and the other two were carried out, also at the seat of the Court, in February 2000. Participants in these four meetings were the Judges of the Court, Commission members, and top figures in the area of International Law of Human Rights from different continents, coming from both academic circles and civil society entities. These meetings delved deeper into such issues as the participation of individuals in the procedure of the Court before the Court; the specificity of the role of the Inter-American Commission; the test of evidence; the procedure in the preliminary exception phase; the enforcement and supervision of Court judgments and Commission report recommendations; and the additional economic resources to strengthen the inter-American system for the protection of human rights. These academic events showed the summoning power of the Court, with a view to strengthening the inter-American system of human rights.

Informe del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Windsor, Canadá, 06 de junio de 2000)

The Court was recently visited by three Presidents of the Republic: in November, 1999, His Excellency the President of the Republic of Paraguay, Dr. Luis González Macchi; in April, 2000, His Excellency the President of the Federal Republic of Brazil, Dr. Fernando Henrique Cardoso; and last week, His Excellency the President of the Republic of Colombia, Dr. Andrés Pastrana Arango. The three Presidents of the Republic were accompanied by their respective Ministers of Foreign Affairs and high-level entourages.

On November 22, 1999, to celebrate its 20th anniversary, the Court hosted the Ministers of Foreign Affairs or their representatives, from numerous countries in the Americas and the Caribbean, accompanied by His Excellency Mr. César Gaviria, OAS Secretary General, and official delegations from this Organization's Member States.

In the international cooperation area, during 1999, the Court continued formalizing the cooperation agreement with the European Union to spread Court publications and develop new information resources and sources for the users of the inter-American system for the protection of human rights. Additionally, the Court signed new cooperation agreements with the Danish Center for Human Rights, the Juridical Investigation Institute of Mexico's National Autonomous University, and Brazil's National Judiciary School. It also continued implementing the agreements signed in previous years with the Supreme Court of Justice of the Republic of Costa Rica, the Supreme Court of Justice of the Republic of Venezuela, the United Nations Development Program, and the "Carlos III" University in Madrid.

Concerning the enforcement of Court judgments, as I already informed this Organization in my previous presentations and as recorded in the *Annual Report* of the Court, it is my responsibility, in keeping with Article 65 of the Convention, to inform this General Commission, on behalf of the Court, about the State of Peru's failure to comply with the judgments rendered by the Court in the *Castillo Páez*, *Castillo Petruzzi et al.*, and *Loayza Tamayo* Cases, by reason of which I must request this General Assembly to examine the matter with a view to have the respondent State enforce said judgments.

On this issue it is important to note that, in addition to the fact that enforcement of judgments is a conventional obligation (Article 68 of the American Convention) of the States Party, the first meeting held by the *Ad Hoc* Group on Human Rights (*supra*), last February 10 and 11 in Costa Rica, issued the following recommendation, among others, regarding the role of States Party to the American Convention as guarantors of the protection system performance and, particularly, the enforcement of decisions made by the bodies of the Inter-American System for the Protection of Human Rights:

4. To recommend the Ministers of Foreign Affairs, within the current competences of the General Assembly and the Permanent Council, that an adequate treatment be given to the reports of the Commission and the Court as a way of enforcing the States' duty to guarantee compliance with the obligations issued by the System's instruments.

This and the other paragraphs of said Meeting's final document were adopted by consensus; the aforementioned paragraph reflects the notion of *collective guarantee*, underlying the American Convention on Human Rights and all the human rights protection treaties.

With regard to the financial statements of the Court, the 1999 fiscal year audit concluded that they suitably depict the Institution's financial and endowment situation, and that revenues, outlays, and cash flow for the 1999 period are in agreement with the generally accepted accounting principles for non-profit organizations (such as the Court) and are applied on consistent bases.

Finally, concerning the budget of the Court, we have submitted to the General Assembly's consideration a draft budget for 2001 that plans for a 37% increase over the 2000 budget. The reason is that the budget has been frozen for the last three years and the only thing intended by the Court is to go back to the 1998 level, by recovering the loss in purchasing power caused by inflation. To the Court's surprise, however, before the General Assembly announced its decision, the increase was not granted and there was a \$150,500.00 cut; nevertheless, the day before yesterday, at the beginning of the General Assembly, OAS Deputy Secretary of Administration personally told me that approximately two thirds of the curtailed funds would soon be restored to the Court. If this so happens, the Court will carry out its regular activities for the rest of the current year.

Mr. President, gentlemen Representatives, on the Court's budget issue, I would like to recall the first of the conclusions reached at the Meeting of the *Ad Hoc* Group on Human Rights, created by the Ministers of Foreign Affairs, which took place in San José, Costa Rica, last February 10 and 11, which recommends top priority allocation of additional resources, in OAS regular budget, to the inter-American organs of human rights. The document containing this and other conclusions was adopted by consensus, as I already remarked.

I would like to close this presentation with a positive message, from myself and my colleagues at the Court, to the Ambassadors and Representatives: I'd like to express the Court's confidence in the States Party to the American Convention on Human Rights as guarantors of it. Undoubtedly positive has been the recent increase in the number of States that have accepted the Court's contentious jurisdiction, as well as the highest-level support accorded to the Court by the Presidents of the Republic and the Ministers of Foreign Affairs or their representatives who have visited it recently. I would like to acknowledge the unrestricted, and even financial, support provided to the Court by Costa Rica, from its inception to date, as well as the recent voluntary donations by Mexico and Brazil.

A noteworthy fact is also the positive contribution to the protection system made, in the last few years, by several States in cases brought to the Court, both the ones who have totally or partially acquiesced to the respective applications, accepting the facts and their responsibility, and the ones who have shown a spirit of cooperation and procedural loyalty in said cases, as well as the ones who have faithfully enforced Court judgments, as I informed in detail in my Report of last April 13 to OAS.

Equally positive have been the initiatives, in the last few months, of the Dialogue on the Inter-American System for Human Rights held at the Commission on Juridical and Political Matters of OAS Permanent Council, under the chairmanship of Ambassador Claude Heller of Mexico, which has produced an important and constructive final Report; as well as the task of the *Ad Hoc* Group on Human Rights made up of Representatives of Ministers of Foreign Affairs, coordinated by Minister Roberto Rojas from Costa Rica, which adopted a series of important conclusions, accepting a constructive proposal made by Ambassador Carlos Portales of Chile. And, finally, I must highlight the substantial resolution recently adopted by OAS Permanent Council on the *Annual Report* of the Court, as well as the participation of 16 Delegations in our debate of last April 13 at the Commission of Juridical and Political Matters, which not only supported the tasks of the Court but also unanimously spoke in favor of an adequate financing for the Court's future work.

The Court is aware of current and future challenges to be faced. I very clearly see the provisions to be made in strengthening our regional protection system, operating in the realm of universality and indivisibility of all human rights. In the first place, as I already pointed out, the ratification of the American Convention and its two Protocols in force, or the adhesion thereto, by all the States in the region is a must. The second provision is the adoption of the American Convention's indispensable domestic implementation measures, with a view to ensure direct applicability of the Convention's norms in State Party domestic law and the faithful enforcement of Court judgments.

The third point consists of the total acceptance of the Inter-American Court's contentious competence by all States Party to the Convention, anticipating the unrestricted *automatism* of the Court's mandatory jurisdiction for all States Party. The clauses concerning the Court's mandatory jurisdiction and the right to individual petition, necessarily joined, are true *stone clauses* of the international protection of human rights: they make it viable for individuals to have access to justice at the international level, which is a true juridical revolution, perhaps the most important legacy we are bringing into the 21st century.

This leads me to the fourth point, namely, the imperative of direct access by individuals to the Inter-American Court's jurisdiction, which first requires ensuring the broadest participation of individuals (*locus standi*) at all stages of the procedure before the Court, preserving the non-contentious functions of the inter-American Commission. Such participation may be assured through modifications to the Rules of Procedure of the Court that we began introducing in September 1996, followed by the crystallization of individuals' right to direct access (*ius standi*) to the Inter-American Court's jurisdiction (that is, to justice at the international level) through the adoption of an Additional Protocol to the American Convention on Human Rights with this purpose. The necessary progress in this sense, coupled with all the indispensable and adequate human and material resources, are desirable to all, since the jurisdictional avenue is the most evolved and perfected form of protection of human rights.

Lastly, I think it is necessary to always bear in mind the broad scope of conventional obligations of protection under human rights treaties, which bind all Branches (Executive, Leg-

islative, Judiciary) of the State. By creating obligations for the States Party *vis-à-vis* all human beings under their respective jurisdictions, said treaties require exercising the *collective guarantee* to fully realize its object and end. The Inter-American Court of Human Rights trusts that the permanent exercise of said collective guarantee will contribute to strengthening the inter-American system for the protection of human rights at the threshold of the new century.

Said strengthening will have to rest, in brief, on four basic pillars: the guarantee of direct access by individuals to the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights and the intangibility of such jurisdiction (*fundamental clauses* of international protection of human rights), coupled to the faithful enforcement of all Court judgments by the States and the exercise of the collective guarantee by the States Party to the obligations recognized in the American Convention. This is a task for all, for the conventional supervision bodies of the Convention, as well as for the States Party, so we can contribute to the building of a better world for our descendants; future generations will judge our task on protection.

Mr. President, Ambassadors and Representatives, on my behalf and on behalf of the Vice President of the Court, Judge Máximo Pacheco Gómez, and the Secretary, Manuel E. Ventura Robles, who are here with me in this act, as well as all the Judges and Court staff, I thank you for your attention in listening to my presentation of this *Report* of the Inter-American Court of Human Rights, concerning its activities in 1999 and its contribution to the strengthening of the inter-American system of human rights. Thank you very much for your attention.

Windsor, Canada, June 6, 2000.